

LA JUVENTUD EN LA REGION DEL GRAN CARIBE¹

Dra. María Isabel Domínguez²

Introducción.

En medio de las complejas circunstancias que vive la Humanidad en las postrimerías del siglo XX, que han obligado a una reflexión internacional acerca de la necesidad de preservar y fortalecer los procesos de integración social de las distintas comunidades – regionales, nacionales y locales – el sector de la juventud requiere una mirada particular, pues ellos serán los que marquen la tónica del presente siglo, al cual están arribando con un conjunto de problemas comunes como generación, a pesar de las diferencias según el contexto concreto en que se desenvuelven, sus condiciones anteriores y sus perspectivas de futuro.

Pero si ello se enmarca en la región del Caribe, la relevancia del tema es aun mayor si se tiene en cuenta que por el proceso de transición demográfica que ella atraviesa³, el número de personas menores de 30 años alcanza altas cifras, las que representan una elevada proporción en el total de la población.

Pero, a pesar de su peso numérico, su importancia cualitativa y los acuciantes problemas a los que se enfrenta, la juventud es vista, en el mejor de los casos, como un grupo que hay que “proteger” y “formar” y, en el peor, como un sector conflictivo al que se debe “controlar” y “neutralizar”. Muy pocas veces es vista como un grupo clave en la articulación de programas y planes de desarrollo, no solo como sus destinatarios sino como actores protagónicos y, de hecho, las condiciones en tal sentido no están creadas.

¹ Este artículo, con algunas modificaciones, fue preparado para el Seminario Internacional “Regionalismo, Seguridad Regional y Sociedad Civil en el Gran Caribe en el Nuevo Entorno Mundial”, organizado por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), La Habana, 25 al 27 de febrero de 2004. Aparece publicado en la Revista Bimestre Cubana 20, La Habana, 2004.

² Investigadora Titular del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas

³ La mayor parte de los países de Centroamérica y el Caribe se encuentran en la etapa de “plena transición” con natalidad moderada y mortalidad moderada o baja, lo que hace que aun durante la primera década de este siglo se mantenga el crecimiento de su población joven (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guyana, México, Panamá, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago). Otro grupo de países que se encuentran en una etapa de “transición incipiente o moderada” con natalidad alta y mortalidad alta o moderada, seguirán incrementando considerablemente el número de jóvenes (Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua). (CEPAL, 2000, 49)

El origen de este fenómeno se relaciona con la propia indefinición presente en la mayor parte de las concepciones sobre juventud, provengan tanto del ámbito académico como del gubernamental o político y a partir de las cuales – dicho de una manera más explícita o más indirecta – se concibe la etapa juvenil como un período de transición a la adultez, de preparación para ella, que es la que realmente “es”.

Ello justifica la falta de prioridad real y la fragmentación en las políticas públicas dirigidas a la juventud que han limitado su transversalidad, ante la ausencia de una verdadera perspectiva generacional. La sociedad adulta se siente satisfecha cuando establece políticas sociales asistencialistas y paternalistas, orientadas a “resolver” los problemas a este sector social, de ahí las insuficiencias que éstas presentan.

Podría decirse, parafraseando a R. Parra que estos fenómenos se han agudizado en una buena parte de los países del área por la confluencia de dos factores: (Parra, 1986).

1. La ausencia de metas nacionales claras, de un plan que dé sentido a una acción económica, social y política y dentro de la cual la juventud se sienta parte.
2. El debilitamiento de la capacidad de socialización de instituciones tradicionales como la familia, la escuela, el trabajo y las organizaciones políticas, porque son los representantes de un orden social que no logra incluirlos.

Tal situación restringe las potencialidades de la etapa juvenil y limita el aporte que las generaciones jóvenes pueden brindar a sus sociedades concretas y al necesario proceso de integración de la región, en uno de los momentos más importantes de la vida, a la vez que incrementa sus problemas pues la falta de inserción multiplica las tendencias desintegradoras⁴ y la débil participación social eleva el rechazo a las estructuras institucionales y organizativas del mundo adulto que no les da cabida, lo que genera un mayor repliegue sobre sí mismos y un creciente descompromiso con cualquier meta social. Es imposible pensar en metas de integración regional si no se

⁴ Se entenderá por tendencias desintegradoras - teniendo en cuenta la definición de integración social utilizada en este trabajo - aquellas que excluyen a los individuos o los grupos del acceso a los bienes y servicios que brinda la sociedad y de la participación en la vida social en sentido amplio, en particular en el estudio, el trabajo y la esfera sociopolítica, así como aquellas que los distancian de las metas colectivas aprobadas por el consenso de la nación (sí es que se trata de naciones donde se ha expresado el consenso de la mayoría). Es necesario aclarar que los efectos desintegradores varían en función del nivel en que se analicen: individual, grupal o social, aun cuando generalmente tienden a interrelacionarse.

han logrado establecer procesos básicos de integración social para los distintos grupos sociales al interior de los países.

Por ello resulta útil el análisis desde la concepción de **integración social** la que puede ser aplicada desde los contextos societales más generales (internacional, regional y nacional), en el ámbito de grupos sociales y hasta en el plano del individuo. En esta concepción (Domínguez y Ferrer, 1996), integración social es la compleja red de relaciones que se entreteje entre tres elementos básicos: justicia social, participación y cohesión nacional.

- Justicia Social, entendida como la real igualdad de oportunidades para el acceso equitativo de todos los grupos e individuos a los bienes y servicios que brinda la sociedad y la ausencia de discriminación de cualquier tipo.
- Participación, entendida no en sentido estrecho, solo como participación política, sino como el acceso y la presencia real de los individuos y los grupos en las instituciones y organizaciones económicas, sociales y políticas de la nación y la posibilidad de intervenir en las decisiones que le conciernen no solo como beneficiarios sino también como formuladores de estas decisiones.
- Cohesión Social, entendida como el sistema de valores y normas compartidas por los distintos grupos sociales que se configura y modifica en el propio proceso participativo.

El elemento central que sirve como hilo conductor entre cada uno de estos tres factores, es la posibilidad de inserción social real que brinda el modelo social, a la vez que los indicadores para evaluar los niveles de integración social logrados pasan por la medición de la inserción alcanzada por los grupos e individuos como expresión concreta en el plano estructural de la justicia social y la participación.

La naturaleza y magnitud de los problemas que enfrenta la juventud de la región del Gran Caribe en la actualidad, incluidas sus particularidades de género, para el logro de una plena integración social no podrán ser enfrentados si no se logra la implicación activa de todos y todas y, en especial, si no se aprovechan las potencialidades de los propios sectores juveniles.

Existen suficientes elementos de diagnóstico acerca de las principales potencialidades y limitaciones de dichos sectores en la región como elementos estratégicos para el desarrollo. Quizás valdría la pena una breve referencia a ellos antes de centrar la atención en algunas de las principales líneas en las que deberían centrarse las políticas de juventud y las posibles articulaciones con ellas desde instancias académicas y movimientos sociales.

Juventud y Educación.

La esfera de la educación es uno de los temas clásicos de análisis como mecanismo por excelencia para garantizar integración social por su capacidad para articular la generación de cambios productivos con participación ciudadana y movilidad social.

Aunque ha estado en el centro del debate su función como instrumento de reproducción o de cambio social (Carnoy, 1985), desde ambas perspectivas se le ha atribuido a la educación un importante papel en ampliar las oportunidades de acceso al bienestar y a la participación social, cultural y política.

La educación tiene la característica de interactuar con la sociedad como un todo, porque tiene el encargo de preparar a los individuos para desempeñarse en todos los ámbitos de la vida y por tal razón recibe demandas de diferentes órdenes. Entre las más comunes resaltan las demandas del sistema cultural *“demanda al sistema educativo la formación de la identidad nacional con la transmisión de valores que garanticen el desarrollo de la sociedad”*; las del sistema político *“demanda al sistema educativo la transmisión de valores útiles para consolidar la democracia, propiciar la solidaridad y la participación”*; y las del sistema económico *“requiere la formación para la productividad y el aporte científico para el desarrollo”* (Marte, 1995, 26).

No puede desconocerse que la actual generación joven de la región caribeña ha alcanzado más elevados niveles de instrucción y calificación en comparación con generaciones precedentes (se estima que, como promedio, la juventud actual dispone de cuatro grados más de escolarización que sus padres), lo que los convierte, en sentido general, en recursos humanos mejor preparados y calificados que los adultos para adecuarse a las necesidades y desafíos de los vertiginosos cambios científicos y

tecnológicos. Sin embargo, aunque esos mayores niveles educativos son sin duda, un elemento favorable a la juventud, ello va acompañado de otras muchas limitaciones.

En primer lugar, según análisis comparativos, ese crecimiento ha sido más lento que en otras regiones del mundo en las últimas décadas debido al insuficiente alcance de la educación secundaria. De manera que el crecimiento se expresa fundamentalmente en la elevación de las tasas de escolarización primaria y en menor medida de la escolarización secundaria a la vez que es también bajo en la enseñanza superior y ello se acompaña de un comportamiento heterogéneo entre países y al interior de ellos.

Se señala que *“América Latina es la región del mundo donde (...) después del Africa Sub-Sahariana (...) es más reducida la proporción de trabajadores con estudios secundarios”* (BID, 1998, 49).

Esa situación se hace particularmente relevante en la sub-región del Gran Caribe en la que *“en un extremo se encuentran países como Guatemala o Haití, donde cerca de la mitad de la población no tiene ninguna educación, y el promedio de años de escolaridad de los adultos es de tres años”,* a la vez que *“la elevada importancia relativa del grupo con alguna educación primaria ... se aprecia en forma marcada en Costa Rica, El Salvador y Honduras donde más de la mitad de la población mayor de 25 años solo tiene alguna educación primaria”* y *“La reducida importancia del grupo con alguna educación secundaria es manifiesta especialmente en El Salvador y Honduras, con menos del 10% de la población en este grupo”* (BID, 1998, 49).

Sin embargo, otros países de la región, especialmente del Caribe anglófono tales como Bahamas y Trinidad - Tobago, al igual que Cuba, han elevado su tasa bruta de escolarización secundaria por encima del 70%. (UNESCO, 1998, 3.35 – 3.45)

Dentro de los elementos progresivos hay que destacar el incremento de la escolarización femenina a un ritmo más acelerado que la masculina lo que hace que en casi todos los países las mujeres hayan superado a los hombres en años promedio de escolaridad (ver tabla 1 en Anexo), aunque ello no se comporta así en las zonas rurales ni para las poblaciones indígenas.

Ello está en correspondencia con unos de los rasgos que ha seguido el comportamiento educativo en la región, caracterizado por su elevada dispersión dentro de la misma generación debido a las fuertes desigualdades tanto en el acceso como en la calidad de la educación entre las poblaciones rurales y urbanas, y entre estas últimas según las condiciones socioeconómicas de las familias, que se refuerza por la diferencia de calidad entre la educación pública y la privada.

A esta situación se asocia el fenómeno de la deserción escolar, uno de los que más afecta a la juventud de las familias de menores ingresos. Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la tasa de deserción de los jóvenes del 25% de hogares de más bajos ingresos es tres veces mayor que la del 25% de hogares de mayores ingresos y en la mayor parte de los casos abandonan la escuela antes de terminar la enseñanza primaria o recién concluida ésta (CEPAL, 2002, 25), es decir, sin haber adquirido los conocimientos mínimos para enfrentar el trabajo y la vida.

Aunque los estudios realizados parecen indicar que el fenómeno de la deserción ha dejado de ser fundamentalmente femenino, múltiples análisis refieren los impactos de una escasa educación y la desvinculación temprana de la escuela para la mujer, tales como conductas sexuales de riesgo, embarazo precoz, riesgo de mortalidad infantil de sus hijos y baja calidad de vida y educación para ellos (BM, 2003, XVI; CEPAL, 2002, 125).

Por último, el tema de la calidad de la educación en general, la pertinencia de sus contenidos para las demandas del mercado de trabajo y la falta de espacios en éste para dar cabida a la juventud que realiza estudios, está limitando el papel de la educación como canal de movilidad social y da lugar a su devaluación, junto a otros fenómenos sociales que están impactando fuertemente a la región como el tema migratorio, al que se hará referencia más adelante.

Sin embargo, según cálculos realizados, queda demostrado que, como promedio, un trabajador que ha concluido su enseñanza primaria tiene posibilidad de obtener un salario 50% mayor que otro que no tiene ningún grado escolar; ingreso que se eleva al 120% si se ha concluido el nivel medio (12 grados) y al 200% para los que han terminado la enseñanza superior (BID, 1998, 41). De ahí que resulte vital centrar la

atención en las acciones educativas y su correspondencia con las oportunidades laborales para la juventud.

Juventud y Empleo.

El segundo factor de integración social para la juventud es incuestionablemente el trabajo porque constituye uno de los nexos principales entre el individuo y la sociedad con un carácter pluridimensional que incluye desde elementos socializadores hasta funciones económicas, psicosociales y culturales, que permitan materializar tanto las metas individuales como los objetivos colectivos: grupales y sociales.

Un panorama difícil para el acceso y estabilización en el empleo ha sido el contexto casi general al que se han enfrentado las distintas oleadas de la juventud que han intentado su entrada al mundo adulto en las dos últimas décadas. Los cambios tecnológicos que han impactado fundamentalmente los procesos de la información y las comunicaciones; los nuevos esquemas productivos y patrones organizativos que obligan a cambiar funciones y oficios; la flexibilización en el trabajo; los sistemas deslocalizados de producción y la influencia creciente de factores externos al empleo, entre otros, han reducido las opciones disponibles, han elevado la competitividad por el acceso a ellas y han reducido su estabilidad.

Estos procesos han llevado, desde la década de los años 80, a replantearse el tema del empleo como mecanismo de socialización secundaria para la juventud, pero sobre todo, como factor esencial de integración social, al no favorecer su completa emancipación económica y familiar y permitir su conversión en actor social autónomo.

En tal sentido, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en 1995 bajo los auspicios de Naciones Unidas, planteó como los tres puntos cardinales de la problemática internacional, junto al tema de la eliminación de la pobreza, los del empleo y la integración social, dejando sentado el estrecho vínculo entre ellos y, a la vez, la gravedad de la situación a escala mundial.

El tema tiene varias aristas. La primera es la referida a la posibilidad real de emplearse que tiene la juventud pues está reconocido que en casi todos los países de América latina y el Caribe el desempleo de las personas jóvenes duplica el desempleo general y

es varias veces superior al de las personas mayores de 45 años, situación que se agrava en el caso de las mujeres jóvenes y en las áreas rurales, grupos para los que existen dificultades de empleo en la región, no solo para sus segmentos juveniles. Es necesario aclarar que esos datos se refieren al “*desempleo abierto*” pero debe tenerse en cuenta que el desempleo juvenil está muy subestimado y no toma en cuenta la llamada “*desocupación disfrazada*” (Rodríguez y Dabezies, 1990, 123).

Además del crecimiento del desempleo, se añaden otros problemas como los cambios experimentados en la estructura del empleo en términos de nivel educacional y precariedad de las ocupaciones; creciente heterogeneidad en las exigencias de educación formal y profesional; aumento del subempleo y aumento de la informalidad laboral. Estos cambios que han tenido lugar en el mercado laboral durante los últimos diez años perfilaron una nueva estratificación ocupacional, que no ha favorecido ni la movilidad social ni una mejor distribución de los ingresos (CEPAL, 2000).

De manera que al tema del empleo se añade el de los ingresos.

Para entender qué ocurre con las remuneraciones para la juventud y dentro de ella con las mujeres hay que partir del panorama general que se caracteriza por los bajos salarios – se señala un atraso salarial respecto de los niveles reales de 1980 – y una creciente diferenciación de los ingresos al interior de la estructura ocupacional. (CEPAL, 1997).

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, un joven de 25 años con estudios superiores solo obtiene un ingreso cuatro veces mayor que otro sin ninguna escolaridad, mientras a los 55 años, esa diferencia se duplica (la diferencia es de ocho veces) (BID, 1998, 41).

Las condiciones de remuneración empeoran para las mujeres jóvenes pues está comprobado que ellas reciben pagos por hora de trabajo significativamente menores a los de los hombres, que en países como El Salvador, se estiman en una diferencia superior al 30%, la que es particularmente más profunda en las ocupaciones informales en las que ellas tienen una fuerte presencia (BID, 1998, 41, 43).

A su vez, la desigualdad de los ingresos es aun más aguda en las áreas rurales en las que se estima como promedio un 28% menos por hora en el campo que en la ciudad, considerando similares características de educación, experiencia y género, las que se mueven en un abanico que va desde un 12% en Costa Rica hasta un 44% en México (BID, 1998, 42).

Quiere decir que al iniciarse el nuevo siglo el panorama laboral con que se encuentra la juventud del Gran Caribe continúa siendo de una elevada complejidad al que se añaden nuevas contradicciones y falta de correspondencias con los procesos educativos y con la remuneración salarial, lo que obliga a reorientar los esfuerzos para focalizar las acciones educativas hacia los grupos en mayores desventajas y hacerlas corresponder con las necesidades del mercado de trabajo, como mecanismos que potencien la integración social y contrarresten la exclusión de amplios segmentos de la juventud.

Juventud y Participación

El tema de la participación política de la juventud guarda importantes vínculos con la participación en la educación y el empleo y juntos conforman tres de los elementos de mayor relevancia a la hora de analizar la integración social.

Desde el punto de vista conceptual, aunque la literatura referida a la participación sociopolítica es amplia y existen visiones polémicas al respecto, dado el estrecho vínculo que guarda con los modelos de sociedad y democracia de los cuales se parte y cómo se conciben las relaciones de poder, así como del nivel de análisis en que se sitúe – macro o microsocioal – las divergencias no ponen en duda, primero, su papel en cuanto mecanismo socializador del poder y, segundo, su decisiva significación para el proceso de integración social y la existencia del funcionamiento realmente democrático de los países.

A pesar de las diferencias de enfoque, existe bastante consenso en aceptar – al menos teóricamente – que la participación es la acción colectiva y organizada para incidir en el poder – del nivel de que se trate – lo que implica necesariamente posibilidad de iniciativa y capacidad de decisión.

Por tanto, compartimos la concepción que considera la *participación* como *el acceso y la presencia real de los individuos y los grupos en las instituciones y organizaciones económicas, sociales y políticas de la nación y la posibilidad de intervenir en las decisiones que le conciernen no solo como beneficiarios sino también como formuladores de estas decisiones.* (Montaño, 1992)

A la vez, evaluamos la capacidad del propio proceso participativo para configurar y modificar el sistema de valores y normas compartidas por los distintos grupos sociales que se expresa como *cohesión social*, es decir, sus potencialidades como mecanismo de producción de sentido colectivo. Por eso es necesario incluir en el análisis elementos más inaprensibles como las motivaciones que guían las conductas participativas.

En este amplio conjunto, la evaluación de los procesos de participación sociopolítica es una de las tareas más complejas desde el punto de vista investigativo si se quiere interpretar con seriedad el significado de indicadores objetivos como la pertenencia a organizaciones y asociaciones, o indicadores de tipo subjetivo como las motivaciones de la participación. Quizás por eso se encuentran con menos frecuencia estudios sobre estos temas que permitan diagnósticos más precisos de la situación u otros que lo abordan de forma muy simplificada.

La pertenencia de la juventud a organizaciones o asociaciones, sobre todo las de carácter sociopolítico, ha sido valorada como eficaz mecanismo de socialización, de identificación personal, de promoción social e incluso de redistribución del poder en la sociedad. Pero en la etapa juvenil la participación se enfrenta a la contradicción entre la dispersión y desorganización típica de la edad y la necesidad de comunicación e intercambio de experiencias y sentimientos arraigados de solidaridad, a lo que se añade que para la participación sociopolítica se requiere previamente una definición de intereses que en esa etapa de la vida aun suelen ser ambiguos.

A pesar de ello, la participación juvenil es un excelente indicador de la extensión, naturaleza y calidad de la participación social en cualquier sociedad, porque ilustra en qué medida el proyecto social que se construye toma en cuenta las energías y diferentes perspectivas de las distintas generaciones, aprovecha sus potencialidades y

brinda la oportunidad de ir remodelándolo de acuerdo con los necesarios cambios que el decursar de la historia impone.

En la actualidad y desde hace algún tiempo, los debates en diversos forums internacionales insisten en señalar que la exclusión del estudio y el trabajo que sufre hoy la juventud, atenta de manera directa contra su participación política. Ese hecho expresa graves cuestionamientos a los discursos sobre una pretendida democracia, que en consecuencia se han vuelto cada vez más falsos e insostenibles.

Tal situación afecta con fuerza a la región del Gran Caribe, escenario geopolítico complejo, en el que convergen disímiles situaciones, desde democracias tradicionales como el caso de Costa Rica, las recientes “democracias” en Centroamérica después de largos períodos de dictaduras, hasta conflictos armados como es el caso de Colombia, el proceso revolucionario en Cuba, la experiencia del gobierno popular en Venezuela o las recientes situaciones convulsas en República Dominicana o Haití. La participación juvenil en el ámbito social es uno de los grandes problemas y, en el plano político, de un modo especial, la marginación de la juventud se sitúa entre los de más difícil solución

Algunos análisis que han intentado explicar las razones de la falta de participación de la juventud hacen referencia a las dificultades para constituir estructuras de representación de sus distintos sectores ante los centros de decisión, así como su descreimiento acerca de las instituciones políticas existentes.

Por estas razones, diferentes autores opinan que la participación política juvenil, que antes adquiriría rasgos contestatarios y de transformación estructural, parece haber dado paso a comportamientos heterogéneos que no proponen la transformación del sistema sino más bien la construcción de un “privado armonioso”, se refugian en el escepticismo y mientras que se restringe la participación en partidos políticos, sindicatos, movimientos estudiantiles, etc, surgen otras formas de expresión juvenil: movimientos de rock, “bandas”, que pueden llegar a la anomia – incluida la drogadicción – o la violencia.

No obstante, el hecho de que la juventud no esté comprometida con visiones y decisiones anteriores que impliquen éxitos o fracasos, favorece una mejor disposición al cambio, rasgo típico de esa etapa del ciclo vital, junto a la elevada energía y creatividad. Esto significa que el grupo tiene más futuro que pasado y un presente signado por la exclusión, y ello puede permitirles actuar como fuerza renovadora de modos de pensar y de hacer. Sin embargo, estas son solo potencialidades que necesitan encontrar condiciones favorables para desplegarse, de ahí que el reto fundamental que tienen ante sí las sociedades actuales en la región del Caribe, pero con vistas al futuro, sea el establecimiento de políticas de juventud que permitan el desarrollo de esas potencialidades.

Juventud y tendencias de desintegración social.

Comprender la relación entre juventud – género – desarrollo en la actualidad pasa no solo por analizar los procesos de integración social de la juventud, sino que es necesario detener la mirada sobre su contrario, las tendencias de desintegración, porque son fenómenos que se condicionan y se complementan mutuamente.

Las limitaciones para el logro de una integración social plena en la etapa juvenil como resultado, sobre todo, de las restricciones para el acceso a la educación y al empleo, de la precariedad de las condiciones de vida y del alejamiento de la participación sociopolítica, provocan la búsqueda de alternativas de sobrevivencia que van desde el éxodo masivo hacia países del Norte (para lo cual se pone en riesgo la vida en muchas ocasiones), hasta la prostitución y el delito como vías de obtención de ingresos, sin dejar de pasar por el incremento del consumo de alcohol y drogas como mecanismo de evasión o enajenación frente al creciente desajuste entre unas expectativas que crecen y se estandarizan ante la avalancha de mensajes de la “sociedad de consumo” y la incapacidad de sectores cada vez más amplios para satisfacerlas.

Pero, a su vez, la entrada en esa esfera de la desintegración, enturbia las capacidades para aprovechar los intersticios de oportunidades que se generan en las sociedades, crea una subcultura de desintegración y, lo que es peor, la reproduce, de manera que las nuevas generaciones nacidas y socializadas en esos nichos tienen pocas posibilidades reales de lograr una integración social plena en un mundo cada vez más competitivo y excluyente.

La región del Gran Caribe concentra una elevada magnitud en algunas de estas tendencias lo que genera una amplia preocupación, por su significado no solo presente sino incluso futuro para el desarrollo del área, pero aunque se habla de incrementar tanto los estudios como las acciones de política para diagnosticar, entender y, sobre todo, controlar dichos fenómenos, en muchas partes no pasan de ser aun meras intenciones.

A tales fenómenos se alude desde diferentes referentes conceptuales. Se retoma el concepto de *marginalidad* – de amplia utilización sobre todo en la Sociología latinoamericana de los años 60 y 70 – y se reconceptualiza como *marginalidad no tradicional* para caracterizar a segmentos de la juventud que expuestos a procesos de urbanización, elevación de su instrucción e influencia de los medios de comunicación, se ven imposibilitados de acceder a una inserción social, sobre todo laboral, de manera formal y estable. También se ha revitalizado el concepto de *anomia* para dar cuenta de comportamientos que implican retraimiento, apatía, ausencia de participación y que incluye en ocasiones, conductas evasivas como la drogadicción.

Cada vez con mayor fuerza se utiliza el concepto de *exclusión* para clasificar la situación de la juventud por su carácter intenso y prolongado y por su extensión a diferentes ámbitos de la vida social: escuela, trabajo, condiciones de vida, decisiones políticas. Y en los últimos años se emplea el de tendencias de desintegración para abarcar fenómenos tan diversos como la emigración, la infección por VIH/SIDA o la violencia.

En el Informe a la Primera Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, en América Latina, se define la existencia de dos grupos como *“las dos caras anímicas de la desintegración”*: *“los disruptores”* y *“los abatidos”*. *“Entre los primeros se cuentan los jóvenes urbanos, cuyos rasgos vitales más característicos son la educación discontinua, la socialización precaria en núcleos familiares mal constituidos, el arraigo territorial marginal y la falta de inserción laboral. Es un grupo proclive a la delincuencia común, con alta incidencia de comportamientos anómicos en el que se suele recurrir a formas violentas para la resolución de conflictos”* (CEPAL, 1997, 75).

Otros autores aluden a la heterogeneidad de los sectores marginales o excluidos como resultado de la combinación de dos fuentes de origen: el impacto capitalista en formas tradicionales de producción y la expulsión de mano de obra como efecto de la propia lógica de la acumulación capitalista. En este sentido se señala: *“Además de la aparición de lo que más adelante llamaré ‘prácticas de refugio’, las principales novedades en la marginalidad son, por un lado, la diversificación mucho mayor de los sectores que pasan a esa situación (encontrándose entre los componentes de la economía informal tanto trabajadores semicalificados como profesionales universitarios de alta calificación) y, por otro, la absoluta falta de aquella esperanza de futura integración social que estaba presente en una buena parte de los teóricos de la marginalidad en los años cincuenta y sesenta”* (Saltalamacchia, 1993).

Aunque a esas realidades no escapa hoy ninguna sociedad, sin lugar a dudas, sus condicionantes, magnitudes, dinámica y significados, varían en distintos contextos y ello es necesario tomarlo en consideración como punto de referencia a la hora de entender sus expresiones en nuestra región.

Uno de los puntos de origen de la desintegración de la juventud radica en los procesos migratorios tanto internos como internacionales. Ante la falta de oportunidades de inserción social en sus lugares de origen, sobre todo en las áreas rurales, se mantiene un fuerte flujo migratorio hacia las ciudades que incrementa la presencia de la juventud en los cinturones de miseria de las periferias urbanas donde llegan a concentrarse hasta el 80% de la población joven (CEPAL, 2000, 22). En estos flujos migratorios hay una fuerte presencia femenina. Estos arribantes a los núcleos urbanos se ubican mayoritariamente entre los desempleados, los empleados informales o en el mejor de los casos en los empleos de baja calidad. No obstante, es posible convertir esta alta concentración en una fortaleza, a partir de promover códigos culturales compartidos como generación casi completamente urbana que les permita una más adecuada inserción social.

Paralelamente a las corrientes migratorias internas están teniendo lugar fuertes flujos migratorios hacia países del Norte, especialmente Estados Unidos y España, pero no solo, en los cuales los núcleos de inmigrantes de Centroamérica y el Caribe alcanzan elevadas proporciones y en muchas ocasiones pasan a reproducir la situación de

exclusión y marginación en las sociedades receptoras. Sin embargo, en lo referido a la migración internacional, no solo parten en busca de mejores oportunidades, jóvenes de los sectores desfavorecidos, sino con relativa frecuencia es una migración calificada que puede ser enmarcada en la tradicional “fuga de talentos” y que constituye un mecanismo de debilitamiento de las ya frágiles estructuras económicas y sociales de la región.

Particular interés tienen los procesos migratorios que se están produciendo al interior de las islas del Caribe anglófono, sobre todo hacia aquellas con economías de turismo y con altos ingresos per-cápitas como Bahamas, Islas Vírgenes, Trinidad – Tobago y Jamaica con un fuerte peso de grupos juveniles. Aunque no se dispone de suficiente información sobre las características de los migrantes, si se constata un predominio femenino asociado a la oferta de ocupaciones en los países receptores en empleos domésticos, de los servicios y el comercio, pero también personas con elevados niveles de calificación que se desempeñan en actividades profesionales (Mills, 1997).

Entre los fenómenos en expansión, sobre todo en las grandes áreas urbanas, se encuentra la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción y diferentes formas de violencia.

Aunque la prostitución es un fenómeno universal y viejo en la Humanidad – surgido junto al propio proceso de división social del trabajo y agudizado en la etapa capitalista con el incremento de las desigualdades sociales, la precaria situación de la mujer de los sectores trabajadores de la población y la doble moral sexista imperante en la cultura – en las últimas décadas se ha hecho más compleja al convertirse en uno más de los negocios transnacionalizados, cuya “fuerza de trabajo” procede de los sectores más excluidos de cada sociedad y de las sociedades más excluidas en el concierto mundial

Ello ha provocado que el incremento del mercado del sexo a escala internacional haya alcanzado proporciones tan alarmantes que permiten considerarlo uno de los más grandes negocios de estos tiempos. Por ejemplo, en República Dominicana, cientos de miles de mujeres viven de la venta de su cuerpo: *“50 mil mujeres de origen dominicano ejercen la prostitución como inmigrantes ilegales (...) Dominicana es el*

cuarto país “exportador” de prostitutas del mundo, después de Tailandia, Brasil y Filipinas”. (Granma, 1996).

Aunque miles de jóvenes, sobre todo mujeres, recurren a este mecanismo de sobrevivencia, una buena parte han sido víctimas del engaño y en muchos casos se pierde la libertad personal. Esto sobre todo ocurre con la niñez, que son alquilados o vendidos y trabajan para un dueño en condiciones de esclavitud, lo que resulta ser la parte más terrible de este fenómeno. A medida que aumentan las ganancias de esta industria, aumenta también la cantidad de menores que mueren víctimas de violencia o contaminados con enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA, y como consecuencia de otras infecciones crónicas.

Según datos de UNICEF, a mediados de los años 90 habían en Colombia entre 5000 y 7000 prostitutas en edades entre 14 y 18 años. En República Dominicana se estimaban en 25000 los casos de prostitución infantil y en los países de Centroamérica el 47% de las prostitutas infantiles eran víctimas de abusos y violaciones dentro de su propia familia. En estos países se estimaba que casi la mitad se prostituyen entre los 9 y 13 años de edad y entre el 50% y el 80% consumen drogas. (Granma, 1996)

No es casual la asociación entre estas tendencias pues hay una fuerte asociación entre ellas como expresión de una subcultura de exclusión, pero que en ocasiones comienza a extenderse a segmentos incluidos y a desdibujar sus límites. Tal es el caso del consumo de drogas lícitas o ilícitas y las adicciones, que en última instancia tienen un nexo directo con la desintegración social al afectar la salud y las posibilidades de una vida sana y plena.

En este sentido, en ocasiones resulta complejo establecer la relación entre consumo de alcohol e integración social por cuanto éste tiene carácter legal, a la vez que cuenta con la aceptación de la población, lo que hace que sus efectos nocivos no sean suficientemente apreciados hasta que no se convierten en casos crónicos, pero bajo sus efectos tienen lugar un conjunto de fenómenos sociales que dañan la integración social de las personas y en ocasiones provocan hasta la muerte, como es el caso de su fuerte nexo con los accidentes de tránsito.

Como ocurre con casi todas las tendencias desintegradoras, el alcoholismo es consecuencia de la desintegración social, pues se asocia a la ruptura – o dificultades para el establecimiento – de vínculos sociales estables ya sean de tipo laborales, comunitarios o asociativos, así como a cambios bruscos de naturaleza socioeconómica o sociocultural. Por ello es común encontrar un elevado consumo entre jóvenes desocupados o entre migrantes del campo a la ciudad o inmigrantes en los países receptores. Pero a su vez, actúa como causa de ésta, al dificultar el establecimiento de nuevas relaciones sociales en las personas afectadas. Entre las derivaciones más nocivas de su uso excesivo se encuentran sus efectos sociales, biológicos y psicológicos y su asociación con otros fenómenos sociales y conductas de desintegración.

La aceptación hace que el consumo aumente, de manera que tiene el papel preponderante dentro de las drogas. *“El alcohol es la única droga legal y no médica capaz de afectar la conciencia y la personalidad, así como de provocar las funestas consecuencias interpersonales y sociales asociadas a las drogas más nocivas conocidas hasta hoy”* (González, 1998, 24).

Algunos cálculos estiman que en América Latina, en la actualidad, la cantidad de alcohólicos rebasa los 30 millones (Bohemia, 2000), aunque por su aprobación social no hay registros seguros acerca de la magnitud de este fenómeno, de ahí que para su medición se utilizan indicadores secundarios como la venta de bebidas alcohólicas, la demanda voluntaria de atención médica asociada a este comportamiento y su incidencia en otros fenómenos sociales como la violencia familiar, accidentes de tránsito, suicidios y homicidios vinculados al alcohol (González, 1998, 27).

Pero no solo las drogas legales son consumidas por la juventud. Desde hace varias décadas los especialistas señalaron que la droga se difunde *“... no cuando está fácilmente al alcance sino allí donde la evolución social ha debilitado más los vínculos interpersonales y la transmisión de normas de una generación a otra”* (Birdwood, 1973, 32).

Ello resulta evidente, pues se ha comprobado que en contextos de extrema pobreza donde resulta absolutamente imposible acceder a cualquier tipo de droga "clásica", como es el caso de los niños de la calle en países como México, se han generado nuevas formas de drogadicción como la inhalación de pegamento o gasolina.

A pesar de esas consideraciones, no cabe dudas que la mayor disponibilidad de las distintas sustancias favorece su consumo y el hecho de haberse convertido en uno de los negocios millonarios a escala internacional, extiende su presencia a distintos ámbitos. Según estimados de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, el mercado ilegal de las drogas en el Caribe genera un ingreso de más de 3000 millones de dólares por año (más del 3% del PIB de estos países). De acuerdo con la propia fuente, por la región circula el 40% de la droga que ingresa a Estados Unidos, el 50% de la producción de marihuana y el 65% de la cocaína que se destina a Europa y aunque el índice de drogadicción en el Caribe sigue aun por debajo del promedio mundial, el contexto en el que está inmersa la zona puede ser de gran vulnerabilidad. (Juventud Rebelde, 2003).

Por eso los especialistas aclaran que *"... todo aquello que fomente la sobreoferta, la disponibilidad, la tolerancia social hacia su uso y la banalización de los daños, se transforma en un estímulo hacia la demanda, o sea, hacia el consumo"* (Yaria, 1999).

A su vez, el tráfico de drogas en zonas donde la juventud no ha podido superar la marginación y el desempleo, es una de las opciones que brinda la economía sumergida para obtener ingresos. Cada vez son más los que venden drogas para poder pagar la suya. Actualmente se registra un incremento acelerado de la criminalidad, ya sea por los efectos de las drogas o por la necesidad de conseguirla, en el caso de sujetos drogodependientes, a la vez que continúa en ascenso la estrecha relación entre consumo de drogas e infección por VIH/SIDA, todo lo cual apunta a la interrelación entre distintas tendencias de desintegración social.

En cuanto al VIH/SIDA, la región tiene la más alta incidencia en el mundo después de Africa, en particular el Caribe de habla inglesa que constituye el segundo grupo de países (PNUD, 2000) y su población joven está considerada como un grupo de alto riesgo, lo que está asociado al hecho de ser también la región, después de Africa, con

la edad de inicio de la actividad sexual más temprana del mundo, con una alta tasa de violaciones, con fuertes prácticas de prostitución, escaso uso de métodos de protección y baja cobertura de servicios de salud sexual y reproductiva, unido a una insuficiente educación en este campo.

Según la organización Panamericana de la Salud, la propagación del VIH/SIDA en los países del área se debe a dos factores claves:

- El alto costo de los medicamentos que se requieren para el tratamiento de una persona afectada. *“El tratamiento de una persona con sida, solo con medicinas, tiene un costo aproximado de 12 mil dólares anuales y aun en países como Estados Unidos este tratamiento se considera extremadamente alto”. “En los países de América hay muy pocos gobiernos que pueden destinar un presupuesto como el que se requiere para proporcionar las medicinas que necesita una persona enferma de sida, por eso es tan alarmante el problema”* (OPS, 1998).
- La falta de educación sexual en la población. *“El problema del sida requiere de una modificación real en el comportamiento sexual de la población de las Américas, y en este contexto estamos hablando de la educación sexual que en la región es casi inexistente”* (OPS, 1998).

Las estadísticas demuestran además, que la infección se concentra en personas jóvenes. En la región el mayor número de casos está ubicado en el grupo de 30-34 años de edad seguido por 25-29 años mientras entre las mujeres, el sector con mayor cantidad de casos es de 25-29 años (OPS, 1998a). Sin embargo, se ha estimado que la mitad de los nuevos casos de personas con vih se dan en menores de 25 años y que entre las mujeres la mayor parte resultan infectadas antes de los 20 años. En este sentido se alerta que la edad media en que los jóvenes se convierten en activos sexualmente suele ser antes de los 20 años, entre los 15 y los 17 años en su mayoría (ONUSIDA, 1997).

Quiere decir que la expansión de la enfermedad se enfrenta a unas cada vez más limitadas campañas de prevención y asistencia efectiva, que no logran evitar que cada día se propague más la pandemia. La escasez de recursos limita la implementación de sistemas educativos y de información y tampoco pueden poner a disposición de la población contaminada tratamientos para prolongar la vida por ser demasiado

costosos. De manera que ya el sida se encuentra entre las diez primeras causas de muerte en numerosas naciones y, dada su evolución, se espera un incremento de su incidencia.

Por último, entre las tendencias de desintegración social que afectan a la juventud del Caribe no es posible dejar de mencionar la violencia que ha resurgido como resultado del incremento de distintas expresiones como la violencia étnica y racial, el crecimiento de conductas anómicas y la llamada "violencia urbana", así como producto de un problema aunque oculto, siempre presente, que es el de la también llamada "violencia doméstica".

Algunos autores señalan: *"factores como la descomposición del tejido social urbano, la quiebra de las estructuras familiares o el crecimiento del consumo de estupefacientes y el desempleo, sobre todo entre las minorías más desasistidas (en particular, los inmigrantes) pueden explicar esta inversión de la tendencia (Chesnais, 1992).*

En la Primera Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de Seguimiento de la Cumbre se señala el aumento de la violencia urbana entre las situaciones que atentan contra la integración social, resultante del *"fuerte vínculo entre concentración urbana, consolidación de núcleos urbanos de pobreza dura e incremento de la violencia" "que tiene altos costos humanos y económicos, ya que contribuye a generar un clima de inseguridad pública, corroe las bases de la ciudadanía y desalienta la inversión"* (CEPAL, 1997, 76).

El incremento de este tipo de fenómeno ha alcanzado tasas incomparablemente altas en relación con cualquier etapa anterior. En la región del Caribe se concentran las más altas tasa de homicidios del mundo con Colombia a la cabeza seguida de México y Panamá. En muchos de estos países, en períodos inferiores a diez años las tasas se multiplicaron por dos, tres y hasta cinco veces y en países donde la violencia no era tradicionalmente percibida como problema, comenzó a expresarse como causa de preocupación de la población (CEPAL, 1997a, 76-77). En el año 2000, en Nicaragua por ejemplo, se dio un crecimiento de los índices de delitos de 7,1% (Granma, 2000b).

En general, las muertes violentas ocupan en casi todos los países el primer lugar entre las causas de mortalidad entre los hombres de 15 a 24 años (accidentes, homicidios, suicidios), a la vez que las dos primeras triplican y sextuplican la cifra respecto a las mujeres de la propia edad (CEPAL, 2000, 144).

De igual forma, se constata que en el Caribe es muy elevada la proporción de jóvenes que portan armas de fuego en las escuelas como resultado de su pertenencia a pandillas, bandas o gangs, pues según investigaciones el 20% de los varones y el 12% de las mujeres estudiantes, han pertenecido a algún tipo de estas organizaciones en algún momento (BM, 2003, 22).

Se ha llegado a la conclusión que la combinación del crecimiento de la violencia urbana con el incremento del narcotráfico y la corrupción en un clima de dificultades para el acceso a la justicia y desconfianza en su gestión ha dado lugar al denominado *“síndrome de inseguridad ciudadana”*, es decir, un *“sentimiento generalizado de inseguridad que deriva de la percepción del aumento de las conductas antisociales y de la desconfianza respecto de las instituciones que deben controlar dichas conductas (poder judicial y policía)”* (CEPAL, 1997a, 79).

Los organismos internacionales han alertado acerca de las consecuencias de estos procesos para la integración social más allá de sus efectos específicos pues sus resultados debilitan o anulan los lazos de una pertenencia compartida y la aceptación de patrones de comportamiento común que permitan el ejercicio de una ciudadanía efectiva. Ello se expresa en cambios en los estilos de vida tales como que se restringe la circulación en espacios públicos, se evita salir de noche o visitar ciertos barrios; se recluyen puertas adentro y se busca el esparcimiento en espacios privados.

Todo ello implica la reducción de las interacciones entre personas de distinta posición social; el desaliento a la sociabilidad espontánea que surge de los encuentros en lugares públicos; se generaliza un sentimiento de sospecha hacia los demás o hacia “los distintos”, que son vistos como potenciales delincuentes; cambia el diseño urbano al proliferar los enrejados y las cercas y aumenta el gasto en la adquisición de artículos de protección física.

Valdría la pena darle seguimiento a la tarea planteada por la UNESCO, que se propuso entre sus objetivos prioritarios para el bienio 2000-2001, *“promover estudios transdisciplinarios sobre las fuentes y las formas contemporáneas de la violencia, fomentar mecanismos y modalidades, en particular las tradicionales, de prevención, y propiciar un mayor grado de sinergia entre los principales agentes institucionales (mediadores, fuerzas de policía, educadores, alcaldes, parlamentarios, etc.) que en los planos local y nacional se encargan del respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos, de la seguridad de las personas y de la gestión del pluralismo cultural”* (UNESCO, 1999, 19).

Las políticas sociales hacia la juventud.

Aunque existe un reconocimiento casi generalizado acerca de la necesaria relación entre política económica y social y acerca de la importancia de que ésta última se oriente a lograr un desarrollo social y a priorizar los sectores en desventaja, los resultados prácticos en pocos casos han sido suficientemente efectivos.

Elevar su efectividad requiere:

1. Enmarcar las políticas de juventud en planes de desarrollo nacional y darles un espacio en los programas de cooperación e integración regional pues los problemas de los y las jóvenes están estrechamente vinculados a los problemas generales de la sociedad en que viven.
2. Involucrar a la juventud en las tareas, considerarla no solo como objeto sino como sujeto de las políticas sociales. Esto supone enfrentar esquemas antiparticipativos que la bloquean para la toma de decisiones, con argumentos como su falta de experiencia o su desinterés y apatía, sin explicar cómo van a adquirir la experiencia o implicarse en los problemas si no es mediante la propia participación. Desde este ángulo, lograr la participación juvenil no significa promover acciones movilizativas desde el Estado, sino crear espacios sociales y condiciones materiales adecuadas que hagan posible su acción autónoma.
3. Elevar el efecto redistributivo de las políticas orientándolas a los sectores juveniles que se pretende beneficiar con ellas y, con la articulación de los planes de las diferentes esferas (educación, empleo, salud, recreación) de manera que el enfoque generacional pueda convertirse en un eje transversal que evite contradicciones, solapamientos y subaprovechamientos, pues la dispersión y la no

identificación clara de los destinatarios deja sin solución problemas claves de los sectores más necesitados. Por ejemplo, los recursos invertidos en la esfera educativa no guardan relación con los beneficios que obtienen los grupos desfavorecidos, por la fuerte influencia contraria de los factores extraescolares sobre el rendimiento escolar, pero la parcelación de las políticas por esferas impide solucionar estas situaciones al no hacer interactuar acciones y recursos en distintas direcciones. Las políticas deben identificar los sectores juveniles más desfavorecidos y los estratégicamente importantes al desarrollo. Tal es el caso, por ejemplo, de la mujer o de la atención especial que requiere la juventud del campo para desacelerar el éxodo rural – urbano o los grupos de más alta calificación para contrarrestar la fuga de talentos.

4. Priorizar el nivel municipal y local de las políticas para poder dar respuestas específicas a la diversidad de grupos juveniles y de situaciones concretas.
5. Construir las políticas de modo interinstitucional e interdisciplinario, con la participación de todas las instituciones relacionadas con la juventud y con la presencia activa de sus propios representantes, a la vez que se requiere un funcionamiento estable y descentralizado. Para ello es necesario mejorar sus financiamientos y utilizar al máximo y del modo más efectivo los recursos de que se dispone para lograr mayores resultados. También es necesario mejorar sus metodologías evaluativas y elevar la rigurosidad de los análisis sobre sus verdaderos impactos.

Sin dudas, la complejidad de la situación actual de la juventud, exige que las soluciones deban combinar simultáneamente definiciones de reestructuración de políticas a más largo plazo y acciones más inmediatas. En ambos casos las palabras claves parecen ser creatividad y participación, con el objetivo de recuperar y potenciar las todavía presentes, aunque dispersas, energías de la juventud.

Ello impone la necesidad de perfilar auténticos espacios juveniles que aprovechen las organizaciones formales existentes y las agrupaciones espontáneas e informales, incluido el apoyo a la formación de nuevas entidades cooperativas – autogestivas, destinadas a la creación de pequeñas unidades de producción y servicios donde puedan canalizar sus demandas de empleo.

Todos estos espacios pueden convertirse en un mecanismo organizativo que promueva alternativas de integración social horizontal y que por su capacidad de gestión pueda brindar una contribución más efectiva al diseño y ejecución de políticas de juventud directamente vinculadas a sus necesidades e intereses. Especial atención requieren las acciones encaminadas a promover la participación educativa, laboral y social de la mujer joven y a favorecer las condiciones para velar por su salud sexual y reproductiva y por sus condiciones de igualdad.

Es un gran desafío que la mayor parte de las sociedades no ha estado dispuesta a aceptar, pero que cada día se hace más difícil de soslayar y posponer sin enfrentar consecuencias irreversibles, no ya para grupos específicos o sociedades nacionales, sino incluso para el futuro de la región

De ahí la importancia de combinar esfuerzos que potencien la atención al segmento juvenil, propiciar que se fije la mirada en los procesos que tienen que ver con la juventud del Caribe como sub-región de la siempre agrupada "América Latina y el Caribe" y buscar vehículos de enlace entre instituciones regionales que desde distintos ángulos abordan el tema, especialmente las propias organizaciones juveniles.

Bibliografía

Banco Mundial (2003), *Caribbean Youth Development Issues and Policy Directions*, Executive Summary, Washington, D. C.

BID (1998). América Latina frente a la desigualdad. Progreso económico y social en América Latina. Informe 1998-1999. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington.

BID-JUVENTUD, Página principal del Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil del Banco Interamericano de Desarrollo, INTERNET www.iadb.org.

Birdwood G. (1973). Ocho escollos que deben evitarse. Revista Correo de la UNESCO. Mayo.

Bohemia (2000). Alcoholismo ¿enfermedad curable?. Entrevista al Doctor Armando García, Director de la Clínica de Alcoholismo del Hospital Hermanos Amejeiras. Revista Bohemia no. 22, 20 de octubre del 1992, La Habana.

Carnoy, Martín. (1985). Educación, economía y estado. En: Educación y Sociedad. Vol. 3., Barcelona.

CEPAL (1997). Panorama social de América Latina 1997. Comisión Económica Para América Latina. Naciones Unidas, Santiago de Chile.

----- (1997a). La brecha de la equidad. América Latina, el Caribe y la Cumbre Social. Comisión Económica Para América Latina. Naciones Unidas, Santiago de Chile.

----- (2000). Panorama social de América Latina 1999 -2000. Comisión Económica Para América Latina. Naciones Unidas, Santiago de Chile. INTERNET (www.cepal.org)

_____ (2000a). Juventud, población y desarrollo: problemas, posibilidades y desafíos. *Serie Población y Desarrollo*, No. 6, Santiago de Chile.

----- (2002), Panorama social de América Latina 2001-2002. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas, Santiago de Chile.

CEPAL – FNUAP - CELADE (2000). Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe. Problemas, oportunidades y desafíos. Santiago de Chile.

Chesnais, J.C. (1992). Historia de la violencia: el homicidio y el suicidio a través de la historia. En: Revista Internacional de Ciencias Sociales. UNESCO. París.

Domínguez, M.I. (1998). Generaciones y mentalidades. Revista Temas 14 pp.26-34. La Habana, Cuba.

Domínguez, M. I. y M. E. Ferrer (1996). Integración social de la juventud cubana: reflexión teórica y aproximación empírica. Informe de investigación. CIPS. La Habana, Cuba.

Domínguez, M.I, M.E. Ferrer y M.V. Valdés (1990). Las generaciones en la sociedad cubana actual. Informe de Investigación. CIPS, La Habana.

Domínguez, M.I, D. Cristóbal y D. Domínguez (2000). La integración y desintegración social de la juventud cubana a finales de siglo. Procesos objetivos y subjetividad juvenil. Informe de Investigación, La Habana.

Elizardo, Carlos (1996). "Juventud y modernización tecnológica". En: Revista Pasos. Número Especial - 6. Dpto Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José, Costa Rica. pp 5-23.

González, R. (1998). SOS. Alcohol y otras drogas. Editorial Oriente, Santiago de Cuba.

González Casanova, P. (1997). La democracia de todos. En: Democracia sin exclusiones ni excluidos. pp. 23-33. Emir Sader (Ed.) Editorial Nueva Sociedad, Venezuela.

Granma (1996). Más de un millón de niños van a la prostitución. Periódico Granma, 27 de agosto, La Habana.

Granma (2000). Pesares de trago en trago. (Entrevista al Dr. Guillermo Barrientos, Jefe del Grupo Nacional de Salud Mental). Periódico Granma, 11 de agosto, La Habana.

Granma (2000a). El SIDA en el mundo. Tiene Cuba el registro más bajo de América Latina. Periódico Granma, 2 de octubre, La Habana.

Granma (2000b). Incrementase la delincuencia en Nicaragua. Periódico Granma, 24 de octubre, La Habana.

Juventud Rebelde (2003). La lucha contra la droga es de todos. Periódico Juventud Rebelde, 17 de enero, La Habana.

Marte, I. (1995). La escuela como centro de la calidad educativa: aspectos administrativos y docentes. La Revista de Educación, Año 2, No.8, Octubre, Santo Domingo. pp. 24-32.

Mattelart, A. y M.A. Garretón (1965). Integración nacional y marginalidad. Editorial del Pacífico, Santiago de Chile.

Medina Carrasco, Gabriel (2000). La vida se vive en todos lados. La apropiación juvenil de los espacios institucionales. En: Aproximación a la diversidad juvenil. Gabriel Medina Carrasco (comp.), El Colegio de México. 79-115.

Mills, F. (1997), Population and Housing Census of the Commonwealth Caribbean. Regional Monographs, Intraregional and Extraregional Mobility, the New Caribbean Migration, Trinidad y Tobago, Comunidad del Caribe (CARICOM).

Montaño, C.E. (1992). La Participación en organizaciones democráticas y autogestionadas. Centro Latinoamericano de Economía Humana. Montevideo, Uruguay.

OIJ (1999). Carta Iberoamericana de Derechos de Juventud. Organización Iberoamericana de Juventud. Madrid, España.

OIJ (1999). IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud. Memorias. Lisboa, 1998.

ONUSIDA (1997). La educación sexual y la prevención contra el SIDA no suponen aumento de relaciones sexuales. Entrevista al Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo de ONUSIDA. EFE, 22 de octubre.

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1998). *La salud en las Américas*, Vol.1.

----- (1998). Dice OPS que es alarmante el problema del SIDA en Latinoamérica. Entrevista al Dr. George Alleyne, Director General de la OPS. NOTIMEX, 12 de abril.

----- (1998a). Contabilizan más de 800 mil casos de SIDA en continente americano. Referencia al Informe La Salud en las Américas. NOTIMEX, 1ro de noviembre.

Parra, R. (1986). Ausencia de futuro: La juventud colombiana. Revista de la CEPAL # 29, Santiago de Chile.

PNUD (1999). Informe sobre Desarrollo Humano. Fondo de Población de Naciones Unidas. Madrid.

PNUD (2000). Entrevista al Representante para Cuba del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa "Umbrales del XXI", TV Cubana, octubre.

Quintana, G. (1998). Discurso del Sr. Germán Quintana, Ministro de Planificación y Cooperación en Chile, durante la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud celebrada en Lisboa del 5 al 7 de Agosto de 1998. Memorias.

Reguillo, Rossana (2000). "Las culturas juveniles: un campo de estudio. Breve agenda para la discusión". En: Aproximación a la diversidad juvenil. Gabriel Medina Carrasco (Comp.) Colegio de México, México. p-p. 19-44.

Rodríguez, E. y B. Dabezies. (1990). Primer informe sobre la juventud de América Latina. Quito, Ecuador.

Saltalamacchia, H.R. (1993). Barbarie capitalista y prácticas de refugio. Ponencia presentada en el II Encuentro Internacional "Movimientos y desigualdades". México D.F., 17 y 18 de noviembre.

Torres Rivas, E. (1989). Situación actual en América Latina. (Intervención en la Tercera Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Juventud, Costa Rica). En: Revista de Estudios de Juventud (Latinoamericana) No. 35, Madrid.

UNESCO (1981). La violencia y sus causas. París.

----- (1994). Notas de orientación del Director General con miras a la preparación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, París.

----- (1998). Anuario Estadístico, París.

----- (1998a). Primer estudio internacional comparativo. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Santiago de Chile.

----- (1999). Programa La ciencia al servicio del desarrollo. Actividades transdisciplinarias. Proyecto Hacia una Cultura de Paz, París.

Vilas, C. (1998). Buscando al Leviatán: hipótesis sobre ciudadanía, desigualdad y democracia. pp. 115-134. En: Democracia sin exclusiones ni excluidos. Emir Sader (Ed.) Editorial Nueva Sociedad, Venezuela.

Yaria, J.A. (1999). Las drogas y el fenómeno de la globalización. En: Revista Española de Drogodependencias, Vol. 24, No. 2. Madrid.

ANEXO

TABLA 1: TASAS DE ESCOLARIZACIÓN EN PAISES SELECCIONADOS. GRAN CARIBE

PAÍS	AÑO	SEXO	TASAS DE ESCOLARIZACIÓN						
			Preprimaria (4-5 años)	Nivel Primario (6 – 11 años)		Nivel Medio (12 – 16 años)		1ro + 2do (6 – 16 años)	Nivel Superior (17 – 21 años)
Bahamas	1995	T	10	100	-	86	-	93	-
		M	10	-	-	-	-	'	-
		F	10	-	-	-	-	'	-
Barbados	1995	T	-	-	-	-	-	-	29.4
		M	-	-	-	-	-	-	23.4
		F	-	-	-	-	-	-	35.4
Belice	1994	T	27	121	99	49	-	98	-
		M	26	124	100	47	-	99	-
		F	28	118	98	52	-	97	-
Costa Rica	1996	T	72	107	94	50	43	83	-
		M	73	108	-	48	-	82	-
		F	72	107	-	52	-	83	-
Cuba	1996	T	88	106	100	77	-	93	12.4
		M	88	108	100	73	-	92	9.6
		F	87	104	100	82	-	94	15.2
R. Dominicana	1994		(3-5)		(6-13)		(14-17)	(6-17)	(18-22)
		T	-	103	81	41	22	84	-

PAÍS	AÑO	SEXO	TASAS DE ESCOLARIZACIÓN						
			Preprimaria (4-5 años)	Nivel Primario (6 – 11 años)		Nivel Medio (12 – 16 años)		1ro + 2do (6 – 16 años)	Nivel Superior (17 – 21 años)
		M	-	103	79	34	18	81	-
		F	-	104	83	47	26	86	-
El Salvador	1996	T	34	94	-	33	-	77	16.7
		M	33	94	-	30	-	77	16.5
		F	35	94	-	35	-	78	16.8
Guadalupe	1996	T	33	84	-	25	-	56	8.0
		M	33	90	-	-	-	-	-
		F	32	79	-	-	-	-	-
Haití	1990	T	41	56	26	22	-	40	-
		M	42	58	25	23	-	41	-
		F	40	54	26	22	-	39	-

			TASAS DE ESCOLARIZACIÓN						
PAÍS	AÑO	SEXO	Preprimaria	Primer Grado		Segundo Grado		1ro + 2do grado	Tercer Grado
Honduras	1994	T	14	11		-		-	10.0
		M	13	110		-		-	11.0
		F	14	112		-		-	8.8
Jamaica	1996	T	-	107	-	-	-	-	8.1
		M	-	107	-	-	-	'	-
		F	-	107	-	-	-	'	-
México	1995	T	72	115	100	61	51	88	15.3
		M	71	116	-	61	-	89	16.2
		F	73	113	-	61	-	88	14.4
Nicaragua	1995	T	20	110	83	47	-	83	11.9
		M	20	109	82	43	-	81	11.6
		F	21	112	85	50	-	86	12.2
Panamá	1994	T	69	104	-	66	-	86	27.2
		M	-	-	-	'	-	-	21.9
		F	-	-	-	'	-	-	32.6
Trinidad y Tobago	1995	T	-	96	88	72	-	86	7.8
		M	-	91	83	66	-	81	8.4
		F	-	102	94	79	-	92	7.0
Colombia	1995	T	35	118	89	72	-	94	18.6

			TASAS DE ESCOLARIZACIÓN						
PAÍS	AÑO	SEXO	Preprimaria	Primer Grado		Segundo Grado		1ro + 2do grado	Tercer Grado
		M	35	119	-	70	-	93	17.7
		F	36	118	-	75	-	95	19.5
Guyana	1995	T	84	95	90	76	-	86	8.6
		M	84	95	90	68	-	83	8.9
		F	84	94	89	85	-	90	8.2
Venezuela	1996	T	44	91	84	40	22	83	-
		M	44	90	83	33	18	80	-
		F	45	93	85	46	27	85	-

Fuente: Statistical Yearbook, UNESCO, 1998, pp. 3.35 – 3.45